XV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2023.

Un análisis sobre la conflictividad laboral en el AMBA en los orígenes de la hegemonía menemista (septiembre de 1990 – abril de 1992).

Leandro Molinaro Instituto Ravignani.

Cita:

Leandro Molinaro Instituto Ravignani (2023). *Un análisis sobre la conflictividad laboral en el AMBA en los orígenes de la hegemonía menemista (septiembre de 1990 – abril de 1992). XV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-025/168

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org*.

XV Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires

Mesa 26: Acción colectiva y organización de trabajadoras y trabajadores: entre las perspectivas históricas y el presente del movimiento obrero
Eje 2: Economía, trabajo

Título de la ponencia: Un análisis sobre la conflictividad laboral en el AMBA en los inicios de la hegemonía menemista (septiembre de 1990 – abril de 1992)
Autor: Leandro Molinaro
Pertenencia institucional: Instituto Ravignani (CONICET-UBA) / CEHTI

En este escrito presentamos un análisis cuantitativo sobre el accionar del movimiento obrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)[1] entre septiembre de 1990 y abril de 1992. En particular, nos centramos en la conflictividad en los sitios laborales debido a la importancia de las organizaciones de base en las luchas sociales en Argentina durante gran parte del siglo XX (Gilly, 1986). Nuestro objetivo principal reside en elaborar una base de datos que sirva como puerta de entrada para mensurar el enfrentamiento entre capital y trabajo en una coyuntura de recrudecimiento de la ofensiva empresarial tras el estallido hiperinflacionario iniciado en 1989. En este sentido, el lapso temporal analizado comienza luego de la privatización de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la primera compañía de importancia enajenada por el menemismo. La pesquisa finaliza con la derrota de la huelga de los maquinistas ferroviarios a finales de abril de 1992 cuando se había consolidado la hegemonía menemista (Bonnet, 2008), en gran parte como consecuencia del derrotero de diversas luchas obreras. Es decir, ofrecemos una cuantificación de la actuación de la clase trabajadora a nivel sindical en una coyuntura marcada por un amplio consenso social en favor de las reformas neoliberales y el surgimiento de un nuevo modo de acumulación (Piva, 2012).

En cuanto a la organización de esta ponencia, en la primera parte realizamos algunas consideraciones sobre la metodología utilizada para elaborar nuestros cuadros estadísticos. En los siguientes dos apartados analizamos los datos relevados sobre la conflictividad laboral tanto a nivel de planta como de aquellas medidas de fuerza impulsadas por la dirigencia gremial. A continuación realizamos una conclusión en la que establecemos algunas reflexiones derivadas del examen cuantitativo que pueden servir para continuar

[1] A comienzos de 1990 esta región abarcaba Capital Federal y 19 partidos situados en el Gran Buenos Aires (GBA): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Gral. San Martín, Gral. Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

indagando desde otras perspectivas sobre la dinámica conflictual del período. Por último, ofrecemos un conjunto de cuadros sobre diferentes aspectos de las disputas laborales utilizados a lo largo del trabajo.

1. Aspectos metodológicos

Los conflictos que cuantificamos en estas páginas refieren a acciones directas como huelgas (de diferente duración), quite de colaboración, trabajo a reglamento, asambleas en horario laboral, ocupación de sitios laborales, ollas populares y huelgas de hambre. Es decir, medidas que interrumpieron el proceso laboral, pusieron en cuestión la legitimidad del poder de la patronal sobre los trabajadores y/o buscaron articular el área laboral con el de reproducción social para robustecer la posición de un colectivo obrero en un determinado enfrentamiento con el Estado o la patronal.

En nuestra elaboración de cuadros realizamos una primera diferenciación entre los pleitos impulsados por las bases en los lugares de trabajo y aquellos promovidos por las dirigencias o agrupaciones a nivel nacional, provincial, de seccional o en empresas. Con ello buscamos centrarnos en aquellos litigios en recintos que fueron emprendidos “desde abajo”: es decir, decididos por un grupo de trabajadores organizados, o no, sindicalmente. En este sentido, establecemos una segunda distinción entre las medidas de fuerza que fueron encabezadas por Comisiones Internas y/o Cuerpo de Delegados (o de representantes gremiales que surgieron de ese mismo proceso de lucha), aquellas que fueron establecidas al margen o en contra de los organismos de base, y las luchas acerca de las cuales no contamos con datos sobre la existencia de algún tipo de representación gremial en el sitio laboral.

Las fuentes utilizadas para elaborar los cuadros estadísticos consisten en tres periódicos comerciales, *Clarín*, *La Nación* y *Crónica*, y la prensa de cuatro partidos de izquierda marxista: el Partido Comunista (PC), el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido Obrero (PO). Justificamos esta elección debido a que *Crónica* priorizaba en sus páginas la información suministrada por las dirigencias sindicales (nacionales, provinciales o de seccionales) y agrupaciones gremiales (principalmente, las peronistas). En menor medida, también otorgaba espacio a acciones impulsadas por organizaciones de base o grupo de trabajadores que se acercaban la redacción del diario para hacer conocer sus reclamos. Por lo tanto, este insumo nos permite, fundamentalmente, relevar datos sobre las confrontaciones incitadas por las dirigencias u organizaciones de base que, en su mayoría, respondían a ellas. En cuanto a los otros periódicos comerciales, *La Nación* y *Clarín*, también otorgaban cobertura, por lo general a conflictos impulsados por las dirigencias que involucraban a una importante

cantidad de trabajadores. Principalmente, daban mayor centralidad a las medidas de fuerza que interrumpían los servicios públicos.

Desde un abordaje disímil, la prensa de la izquierda marxista proporcionaba cobertura a acciones directas ejercidas desde los recintos de trabajo. La relevancia que estos partidos le suministraban a este tipo de conflictividad tenía diferentes motivaciones: debido a que contaban con activistas en esas unidades de labor, buscaban insertarse o ganar la simpatía de los trabajadores en lucha (la difusión de la prensa y el "piqueteo" en la puerta de las fábricas eran actividades fundamentales para estos partidos). Cuando un pleito tenía cierta repercusión social, le otorgaban cobertura con el fin de legitimar sus propias posiciones ante el gobierno, la patronal, la dirigencia gremial y otras agrupaciones políticas con inserción en ese espacio. Todos estos insumos nos permitieron acceder a una gran cantidad de disputas y, a la vez, conocer diferentes formas de abordarlas y los debates políticos que suscitaban el devenir de muchas de ellas.

Las bases de datos sobre la conflictividad en la década de 1980 disponibles (McGuire, 1996; Nueva Mayoría, 2013; Spaltenberg, 1996;[2] Gómez, *et al.*, 1996)[3] resultan de valor para utilizarlas como referencia o para establecer algunas comparaciones. No obstante, presentan algunas particularidades metodológicas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, todas ellas exponen un relevamiento a escala nacional. Solo McGuire explicita las zonas donde se desarrollaron los pleitos. En segundo término, toman como unidad de análisis diferentes acciones. Por ejemplo, mientras que Spaltenberg analiza toda interrupción del proceso de trabajo (incluyendo los *lock out* patronales), la investigación encabezada por Gómez aborda el "conflicto obrero" que incorpora acciones como el "estado de alerta y movilización" (que no necesariamente paraliza la jornada laboral), y McGuire cuantifica solamente las huelgas. El Centro de Estudios para la Nueva Mayoría (CENM) también toma como unidad a las huelgas, aunque solo aquellas impulsadas por los sindicatos sin tener en cuenta los paros surgidos en sitios laborales de forma aislada o autónoma a las asociaciones gremiales. Además, cuantifica las huelgas generales en una categoría aparte.[4]

Una tercera diferencia consiste en que estos autores remiten a diferentes fuentes. La serie elaborada por McGuire se basa en la información suministrada por *Tendencias Económicas* (boletín semanal del Consejo Técnico de Inversiones). El trabajo de Gómez *et al.* toma como referencia cinco diarios comerciales (*Clarín*, *Crónica*, *Diario Popular*, *Ámbito*

[2] No accedimos directamente al trabajo de Spaltenberg, sino que nos basamos en lo expuesto por Donaire y Lascano (2002).
[3] El trabajo de Gómez *et al.* continúa la serie estadística iniciada por Villanueva (1994) para el período 1984-1989.
[4] Las especificaciones sobre la unidad de análisis tomado por el CENM se encuentra en: *La Nación*, 8-2-1988 y en Nueva Mayoría (2013).

Financiero y *Página/12*). El CENM también recauda los datos de estos periódicos y de otros de tirada nacional (*La Nación*, *La Prensa*, *El Cronista*, *Ámbito Financiero La Razón* y *Tiempo Argentino*). Spaltenberg se basa en lo publicado por el Servicio de Documentación e Información Laboral (DIL)[5] y, además, en la serie de McGuire.

En cuarto lugar, los períodos que se abordan en estas obras difieren entre sí: McGuire presenta un análisis desde 1984 a 1993, Gómez *et al.* entre 1989 a 1995, el CENM desde 1980 hasta 2012 y Spaltenberg durante la década que transcurre entre 1984 y 1994. Por último, McGuire es el único de estos autores que ofrece públicamente su base de datos en la cual se puede individualizar cada conflicto relevado,[6] mientras que en el resto de las obras solo se tiene acceso a los datos ya procesados. En definitiva, debido a todas las razones recién expuestas estas series estadísticas presentan resultados disímiles.[7]

Así como encontramos dificultades en otras muestras, somos conscientes que nuestra pesquisa requiere una serie de precisiones ya que el procesamiento de los conflictos implica ciertas "zonas ambiguas". En primer lugar, resulta necesario definir la unidad de análisis. La categoría de conflicto laboral utilizada refiere a una disputa que puede involucrar una o más medidas de fuerza. Con respecto a su extensión temporal, señalamos su inicio desde el momento que un colectivo de trabajadores realiza una acción directa. Su finalización se establece cuando los reclamos que dieron origen a ellas son solucionados (favorable o desfavorablemente para la parte obrera), o cuando estos se diluyen y las acciones directas son discontinuadas. Ahora bien, en los casos en que estas últimas fuesen interrumpidas por algún tipo de negociación (por lo general, vinculada a la sanción de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo), si fueran retomadas luego de esta tregua, entendemos que forman parte de un mismo conflicto. Asimismo, debemos puntualizar que cuando un pleito se extiende más allá del subperíodo de cada capítulo, no lo duplicamos, sino que lo ubicamos solamente en el momento en el que se inicia.

Una segunda cuestión a precisar radica en los sujetos que formaron parte de la dinámica conflictual. Nuestro objetivo de diferenciar las acciones impulsadas por las bases de aquellas decididas por las dirigencias, nos obliga a explicitar cómo realizamos tal desambiguación. Por un lado, con respecto a los espacios que consideramos como sitio laboral. Dependiendo el tipo de empresa o gremio puede ocurrir que trabajadores que ejercen sus funciones en diferentes sedes o lugares de trabajo fuesen agrupados como parte de un mismo colectivo. Por ejemplo, englobamos como parte de un mismo conflicto al

[5] Este boletín mensual se sustenta, principalmente, de información periodística y de aquella proporcionada por los sindicatos (Dawyd y Nassif, 2013).
[6] Véase: http://jmcguire.faculty.wesleyan.edu/mcguire104ctries1990data/
[7] Para un análisis comparativo y crítico sobre el período 1984-1988 en base a los estudios de McGuire, el CENM y Villanueva, véase Massano (2022).

accionar en conjunto de empleados de diferentes sucursales bancarias o de dependencias estatales que poseían varias oficinas distribuidas en distintas ubicaciones. Por otro lado, otra situación ambigua se desprende de cómo agrupamos aquellos enfrentamientos en lugares de trabajo donde el personal pertenecía a diferentes gremios o asociaciones (como en los astilleros que contaban con obreros navales y metalúrgicos, organismos estatales como el CONICET en donde confluían científicos y empleados administrativos, o periódicos que enrolaban trabajadores de prensa y gráficos). Al momento de procesar un conflicto de estas características según el gremio, lo establecimos de forma arbitraria solo en uno de ellos, para evitar su sobredimensionamiento.

Otra problemática deriva de la toma de decisiones que lleva al enfrentamiento. Por lo general, cuando encontramos que un conflicto era decidido por un sindicato a nivel nacional, provincial, municipal o de seccional, lo ubicamos en la categoría de "disputa decidida por la dirigencia". Sin embargo, cabe señalar algunas excepciones. En algunos gremios como el ferroviario, las bases podían organizarse en asambleas y decidir medidas de fuerza a nivel de seccional. En estas ocasiones, establecimos la disputa como impulsada por un organismo de base. De igual forma procedimos cuando en situaciones en que las Comisiones Internas abarcaban más de un lugar de trabajo (como en entidades bancarias u dependencias estatales), la decisión de realizar medidas de fuerza era tomada por delegados. La misma categorización fue establecida en oportunidades en que los delegados y otros empleados actuaron en contra de lo pretendido por la CI (como en algunas disputas protagonizadas por bancarios). Por último, también en el mismo ítem situamos a enfrentamientos en el que participaron trabajadores de distintas empresas que se unificaban por un reclamo en una zona en particular (por ejemplo, los pedidos de mayor seguridad ante delitos por parte de conductores de diferentes líneas de colectivos).

Por el contrario, en casos en que la dirigencia decidía tomar acciones directas en un lugar de trabajo específico o en una sola empresa con diferentes sedes (como podía ocurrir en el gremio aeronáutico en el cual las acciones se realizaban, por lo general, en el Aeropuerto de Ezeiza y/o en Aeroparque contra las patronales de Aerolíneas y Austral), ubicamos este pleito como decidido por las cúpulas gremiales. Lo mismo cuando nos referimos a disputas impulsadas por la conducción de un sindicato por empresa, salvo en casos de que los trabajadores participasen de la gestación de las medidas de fuerza (a través de asambleas).

En suma, el criterio utilizado puede llevar en algunos casos a subvalorar o sobrevalorar tanto la actuación de las organizaciones en los sitios laborales como las de las dirigencias. Estas "zonas ambiguas" pueden vincularse a las limitaciones que tienen este tipo de pesquisas, varias de las cuales han sido señaladas por Ghigliani (2009). Con el fin de atenuar algunas de las críticas que realiza este autor, es pertinente realizar algunos

señalamientos sobre nuestra investigación. En primer lugar, como ya mencionamos, el relevamiento no solo abarca a las huelgas (categoría sobre la cual Ghigliani elabora sus observaciones), sino también sobre otras medidas de fuerza. En segundo término, los cuadros elaborados no pretenden expresar la totalidad de los enfrentamientos gremiales del período, sino que representan el universo con el que realizamos nuestro análisis. Esta es una de las razones por la que consideramos que una base cuantitativa resulta necesaria pero no suficiente para llevar a cabo conclusiones sobre la conflictividad laboral de un período. Los datos recolectados pueden servir de sustento empírico para, posteriormente, profundizar sobre aspectos cualitativos. Con respecto a la limitación vinculada al uso de los insumos, consideramos que las fuentes utilizadas nos permiten realizar un acercamiento tanto a disputas impulsadas por las dirigencias como acciones localizadas a nivel de planta. No obstante, acordamos con Ghigliani que este tipo de documentación nos dificulta conocer la duración exacta de los pleitos o no da cuenta de medidas que no fueron anunciadas por el colectivo de trabajadores, como sucede con aquellas realizadas de forma clandestina (por ejemplo, los sabotajes). Por último, otra observación que efectúa este historiador refiere a la subestimación de la conflictividad desarrollada en diferentes provincias del país ("el interior"), tal como suele ocurrir en las series estadísticas que utilizan como referencia a periódicos nacionales cuya sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Para evitar ello, explicitamos que limitamos la pesquisa a la zona del AMBA a la cual las fuentes consultadas le dan mayor centralidad.

2. Los años de menor conflictividad laboral desde la reinstauración del orden democrático

El muestreo para los meses que transcurren entre septiembre de 1990 y abril de 1992 (19 meses) arroja 200 conflictos laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (**Anexo: Cuadro I**), es decir, 10,5 por mes en promedio. Si lo comparamos con los 19 meses anteriores, desde el inicio de la hiperinflación (febrero de 1989), encontramos una caída de aproximadamente 40%. Teniendo en cuenta las series estadísticas a escala nacional, nuestro relevamiento en AMBA se acerca a lo reproducido por Gómez, *et al.* (1996) y Spaltenberg (1996) en cuanto a la existencia de una baja en la conflictividad laboral a partir de 1991. Además, al encontrar un emparejamiento entre las medidas tomadas desde los lugares de trabajo y las decididas desde la conducción gremial, encontramos una dispersión, lo cual resulta similar a lo postulado por Piva (2012). La disminución de las confrontaciones iniciadas por las cúpulas a nivel nacional también aparece reseñado por el CENM (Nueva Mayoría, 2013), principalmente para 1992.

En principio, cabe especificar dos cuestiones sobre nuestro análisis cuantitativo para Capital Federal y Gran Buenos Aires. En primer lugar, la caída fue más pronunciada en las disputas impulsadas por la dirigencia sindical. Tengamos en cuenta que entre febrero de 1989 y septiembre del siguiente año encontramos 180 pleitos (en promedio 9,5 por mes), mientras que solo encontramos 100 (5,3) en la misma cantidad de meses subsiguientes. Este índice nos muestran un agotamiento de la táctica confrontacionista de las cúpulas gremiales, lo cual puede vincularse a diferentes factores: los vínculos de la dirigencia con el Estado y el sector empresarial, una disminución de la presión por parte de las bases para llevar adelante medidas de fuerza y el retroceso de las agrupaciones combativas en algunos gremios en el que antes tenían mayor injerencia.

En segundo término, los sitios laborales también experimentaron una baja considerable de pleitos (5,3 en promedio por mes frente a 6,7 entre febrero de 1989 y septiembre de 1990), aunque resultó menos pronunciada en cuanto a los pleitos liderados por Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados (4,3 frente a 4,9). La capacidad de resistencia que aún conservaban algunos colectivos de trabajadores, principalmente en ciertos organismos y compañías del Estado, explican en gran parte esto último. El sector industrial, en el cual predominaba el capital privado, tuvo poca participación en comparación con el de servicios (36 y 64 litigios, respectivamente) (**Anexo: Cuadro II**).[8] Al compararlo con el subperíodo febrero de 1989 – septiembre de 1990 nos muestra un retroceso en ambos sectores (de 4,5 en promedio por mes a 3,4 en el industrial y de 2,4 a 1,9 en el de servicios).

De forma similar, hallamos una mayor disminución de las luchas en el área privada que en la estatal (**Anexo: Cuadro III**). En cuanto a la primera relevamos 53 confrontaciones (2,8 en promedio por mes frente a 3,7 en el subperíodo anterior), mientras que en las empresas y organismos estatales relevamos 46 por lo que la disminución fue menos perceptible (2,4 contra 2,7). Aunque, en este último caso, la baja fue relativa con respecto a lo visto en el capítulo anterior ya que algunas compañías habían pasado a manos privadas y no se tuvieron en cuenta en esta categoría.

Desde esta perspectiva, resulta posible comprender el predominio que tuvieron los ferroviarios y bancarios (en su mayoría de la banca pública) cuando abordamos la cantidad de disputas en lugares de trabajo dividida por gremios (**Anexo: Cuadro IV**). Con respecto a los trabajadores del riel, se desarrollaron medidas de fuerza en diversos sectores por bajos salarios y malas condiciones laborales. Principalmente, se destacó tanto la huelga de 45 días ocurrida entre febrero y marzo de 1991 como la huelga de 38 días llevada adelante entre marzo y abril del siguiente año. Estas acciones fueron protagonizadas en su mayoría

[8] El principal conflicto protagonizado por obreros industriales en una empresa que contaba con participación estatal ocurrió fuera del AMBA: la siderúrgica SOMISA ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

por maquinistas, enfrentados tanto a la empresa estatal como a las direcciones de los sindicatos. El primero de estos pleitos fue iniciado en un plenario realizado por varias seccionales de La Fraternidad (LF): cinco del Roca: Kilo 1, Escalada, Temperley, Tolosa, Las Flores; dos del Sarmiento: Haedo y Castelar; y dos del Mitre: Latinoamérica y San Martín; y dos seccionales del sindicato de señaleros (ASFA): 12 de Octubre del Sarmiento y 17 de Marzo del FFCC Roca. En este encuentro de delegados se decidió un paro de 24 horas para el 5 de febrero y de 48 horas para el 13 y 14 de ese mes. Luego de esta última medida, el gobierno efectivizó los despidos que había amenazado con realizar. Por lo que el litigio se transformó en un paro por tiempo indeterminado. En su punto más álgido (durante la segunda quincena de febrero) enroló a más de 80 seccionales (entre 8000 y 20 mil ferroviarios, según las fuentes consultadas), en su mayoría del AMBA.[9] La medida paralizó de forma casi constante a cuatro líneas ferroviarias interurbanas (Sarmiento, Mitre, Roca y San Martín) y de forma intermitente a los servicios de las restantes (Urquiza y Belgrano). A pesar de las presiones del gobierno que incluyeron el anuncio del cierre preventivo de todos los ramales paralizados (4 de marzo),[10] las seccionales rebeldes lograron hacerlo retroceder al conseguir aumentos salariales (aunque por debajo de lo que reclamaban), y, fundamentalmente, la reincorporación de la gran mayoría de los despedidos durante el conflicto.[11]

En cambio, la huelga de 1992 solo involucró a una veintena de seccionales de los fraternales (principalmente, las seccionales Kilómetro 1, Kilómetro 5, Remedios de Escalada, Temperley y Tolosa del Roca; y Castelar y Haedo del Sarmiento).[12] El conflicto se inició a partir de un incidente en la terminal de Constitución que fue utilizado por la administración menemista con el fin de disciplinar al gremio.[13] Se desarrolló en un contexto

[9] *Crónica* (1° edición), ediciones 5-2-1991 y 20-2-1991; *Nuestra Propuesta*, N° 64, 7-2-1991. El número de seccionales adheridas diverge según las fuentes. Crónica en su edición del 20-2 postula que había 60 seccionales de LF, 11 de UF y 11 de ASFA en paro. Sechi (2009), señala que el 18 de febrero eran 80 las seccionales adheridas y, una semana después, su número ascendía a 96 (80 de LF, 12 de ASFA y 4 de UF). Por su parte, el MAS establece que hacia el tramo final de la huelga el paro era sostenido por 44 seccionales en total. *Solidaridad Socialista*, N° 415, 25-3-1992.

[10] *Clarín*, 5-3-1991.

[11] *Solidaridad Socialista*, N° 373, 3-4-1991.

[12] *Solidaridad Socialista*, N° 415, 25-3-1992.

[13] El lunes 9 de marzo en Plaza Constitución (cabecera del Ferrocarril Roca) se produjo la muerte de un pasajero por la falta de mantenimiento de los trenes (su brazo quedó aprisionado a la puerta y su cuerpo por fuera del tren hasta quedar aplastado contra una defensa que se encontraba al final del andén). Al no funcionar el sistema que avisaba al maquinista y al guarda de este desperfecto no se pudo evitar este desenlace. Cuando tres días después, el juez que intervenía en la causa imputó por homicidio simple al guarda, sus compañeros (afiliados a UF) decidieron trabajar a reglamento (que los trenes cumplieran todas las normas antes de salir de la terminal), lo cual generó demoras. Los retrasos provocados y la falta de información al respecto generó enojo en los pasajeros. Un grupo de personas que se encontraba en la estación (posiblemente, policías de civil) comenzaron a agredir a empleados ferroviarios, desatando, luego, una gresca generalizada. La Policía Federal respondió con una dura represión que generó heridos y detenidos. Más tarde fueron detenidos delegados de LF que se habían acercado al lugar alertados porque la represión había herido a ferroviarios (llegaron desde Remedios de Escalada en donde habían realizado una asamblea que había decidido levantar una medida de fuerza) y a otros

de consolidación del peronismo gubernamental, a partir del éxito del plan de Convertibilidad y de debilidad de los ferroviarios por el desgaste de la lucha del año anterior. Si bien otras seccionales de LF se sumaron de forma intermitente, la huelga tuvo una menor coordinación y padeció un aislamiento aún mayor que la anterior. Los maquinistas decidieron finalizarla sin conseguir que fueran reincorporados los maquinistas cesanteados durante la disputa (alrededor de 200). Además, un gran número de delegados fueron pasados a disponibilidad a la espera del juicio por desafuero.[14]

Por su parte, los bancarios también llevaron adelante una gran cantidad de disputas, aunque sin las mismas repercusiones. Como podemos observar en los cuadros sobre las pugnas impulsadas según cantidad de trabajadores y por extensión temporal (**Anexo: Cuadro V y Cuadro VI**), el Banco Nación fue el más destacado. El reclamo salarial y las posibilidades concretas de reducción de fuentes laborales fueron las principales preocupaciones que llevaron a tomar acciones directas. Una situación similar ocurría en otras entidades públicas como en la Caja de Ahorro y Seguro que, además, estaba bajo amenaza de ser privatizada (como finalmente terminaría ocurriendo en septiembre de 1992). Probablemente, en el Nación hubo una mayor predisposición a actuar debido al triunfo en las elecciones de Comisión Interna de una lista integrada por diferentes agrupaciones opositoras a la conducción nacional de AB. La CI impulsó numerosas asambleas y una campaña contra el retiro voluntario, principal herramienta del gobierno para disminuir el número de empleados públicos en esta etapa. Sin embargo, bajo esta modalidad, se perdieron 700 puestos de trabajo solamente en la sede central de Capital Federal.[15] En ello contribuyó que la dirigencia gremial, si bien discursivamente se oponía al retiro voluntario, no realizó medidas contra ello y consideraba que era una decisión individual de los empleados acogerse a ello.[16]

En cambio, en el Banco Alas, un banco privado intervenido por el Banco Central en abril de 1990, esta opción no estaba disponible por lo que los empleados exigieron ser trasladados a otras entidades. Para ello realizaron varias movilizaciones y la ocupación de la casa matriz. A pesar de la extensión de la pelea (entre diciembre de 1990 y mayo de 1991), la dirigencia de AB se limitó a negociar indemnizaciones y la compra del banco por

---

maquinistas que estaban en Constitución (la mayoría por motivos laborales y uno que se había acercado a despedir a su esposa que se iba de vacaciones). La detención duró varias horas, aunque dos días después 12 de los maquinistas fueron procesados por los incidentes y puestos en disponibilidad, lo cual significaba un despido encubierto. Ante esta situación, cuatro seccionales de La Fraternidad del Roca (Kilómetro 1, Kilómetro 5, Remedios de Escalada y Tolosa) anunciaron un paro por tiempo indeterminado (Lucita, 1999).

[14] *Prensa Obrera*, N° 356, 9-5-1992.

[15] *Solidaridad Socialista*, N° 406, 5-12-1991.

[16] *Solidaridad Socialista*, N° 396, 26-9-1991.

otras entidades. Al fracasar la licitación del Alas en cuatro oportunidades, finalmente, el Central procedió a liquidarlo.[17]

En otro tipo de actividad como la metalúrgica, observamos un comportamiento similar de la dirigencia. Los empresarios de esta rama industrial llevaron adelante despidos y suspensiones masivas a partir de los cambios productivos introducidos y debido al cierre de muchos establecimientos por la imposibilidad de competir con las importaciones en el marco de la Convertibilidad. En relación con ello, 6 de los 7 pleitos llevados adelante por los metalúrgicos del AMBA incluían como principal reclamo la oposición a la expulsión de fuerza de trabajo.[18] De todos estos enfrentamientos, el de La Cantábrica (Morón) fue el más destacado porque sus trabajadores desarrollaron una larga resistencia (8 meses) contra el cierre de las instalaciones.[19] En asamblea se decidió la toma del establecimiento en varias oportunidades (mayo, junio y noviembre de 1991), montar una olla popular y la huelga de hambre de varios delegados y dirigentes gremiales (durante dos semanas en noviembre). Precisamente, estas acciones fueron encabezadas por la CI y por directivos de la seccional de Morón de la UOM (cuyo secretario general era Hugo Barcus). En este caso se exhibió la crisis de la táctica "vandorista", dado que no había mucho por negociar. El grupo Coll (dueño también de Aceros Bragado) había decidido deshacerse de la fábrica, por lo cual el objetivo de la cúpula sindical consistió en conseguir un préstamo oficial o que la firma fuese comprada por otros empresarios. Sin embargo, el colectivo obrero al tiempo que apoyaba la gestión de la CI y de la conducción de la UOM, apeló a tácticas extremas: en una de las ocupaciones se decidió tomar como rehenes a varios gerentes y miembros del directorio durante más de 24 horas (entre el 18 y el 19 de noviembre). Esta medida inusual en esta coyuntura de repliegue del movimiento obrero respondía a la desesperación de los trabajadores. Finalmente, la huelga de hambre y la ocupación fueron levantadas a principio de diciembre cuando un grupo empresario arrendó la fábrica por 90 días.[20] Sin embargo, ello no resultaría y la empresa cerraría definitivamente sus puertas en julio de 1992.

El otro gremio industrial que se destacó en nuestro muestreo fue el del neumático. Allí, las patronales de las pocas empresas del rubro aplicaron una reconversión ayudada por la disposición del gobierno de atar los aumentos salariales a la productividad. Esto

[17] *Crónica* (6° edición), ediciones del 28-1-1991 al 30-1-1991; *Crónica* (1° edición), ediciones del 28-5-1991 al 31-5-1991.

[18] En el gremio metalúrgico debe tenerse en cuenta que los pleitos más importantes en estos años ocurrieron fuera del AMBA: SOMISA (San Nicolás, Buenos Aires) y Acindar (Villa Constitución, Santa Fe). Sobre la siderúrgica de capitales mixtos, véase: Correa, 2006; Pozzi y Schneider, 1994; Soul, 2014. Sobre la disputa en Acindar, véase: Filippa, 2012; Giniger, 2014; Jabbaz, 1996.

[19] Otra metalurgia del oeste del conurbano, Motormech, protagonizó una extensa lucha (3 meses) contra despidos.

[20] Véase, *Crónica* (1° edición), ediciones del 10-4-1991, 6-5-1991, 7-5-1991, 8-5-1991, 6-6-1991, 7-6-1991, 4-11-1991, 11-11-1991, 19-11-1991, 20-11-1991, 22-11-1991, 24-11-1991, 29-11-1991, 30-11-1991, 3-12-1991; *Nuestra Propuesta*, N° 105, 21-11-1991; *Solidaridad Socialista*, N° 404, 21-11-1991.

permitió la expulsión de fuerza de trabajo, lo que suscitó diferentes grados de resistencia en Pirelli, Firestone y en FATE. En este último establecimiento ubicado San Fernando (zona norte del GBA), la contienda fue intensa por una serie de factores. En primer lugar, debido a que contaba con un CD compuesto por activistas combativos pertenecientes la Lista Bordó, un frente de diferentes agrupaciones (el MAS y sectores del peronismo) que recientemente había ganado las elecciones tanto allí como en la seccional de San Fernando. En ambos comicios había vencido a la Celeste y Blanca ligada al peronismo de esa localidad (Varela, 2015). Un segundo factor fue el descontento provocado por la licuación de haberes producido en los últimos años. Precisamente, el detonante del enfrentamiento estuvo vinculado a que, a pesar del crecimiento de los ritmos de producción, la empresa no había cumplió con su compromiso de aumentar los haberes. Ante esta situación, los operarios, en primer lugar, efectuaron paros parciales a fines de noviembre de 1991. Sin embargo, tras la ilegalización de la medida por el gobierno, la patronal procedió a despedir a 850 obreros (de un total de 1100) y contrató personal transitorio para suplir las tareas. Como respuesta, los despedidos bloquearon los accesos de la planta impidiendo el ingreso de micros con los nuevos contratados. El 6 de diciembre la policía reprimió el piquete, detuvo a ocho trabajadores y cuatro de ellos debieron ser internados por lesiones. Durante los siguientes dos meses, los cesanteados montaron una olla popular, se formó una comisión de mujeres (integrada principalmente por las esposas de los operarios) y recibieron la solidaridad de partidos políticos opositores, de varios trabajadores de fábricas cercanas al establecimiento (Saccor, Corni Fundiciones), sindicatos de otros países (Central Obrera Boliviana, Sindicato de Trabajadores del Neumático de Río de Janeiro) y de la comunidad barrial ligada estrechamente la compañía (barrio FATE).

La táctica de la patronal consistió en ofrecer reincorporaciones a cuentagotas para dividir a los trabajadores, lo cual fue aceptado por el la dirección nacional del SUTNA. Esto debilitó al colectivo en lucha ya que luego de siete asambleas en las cuales se rechazó la postura de la empresa, finalmente, en la octava reunión (17 de enero de 1992) se votó por aceptar el ingreso de 550 operarios, dejando en la calle a 300.[21] A la vez, la empresa logró imponer el pago de indemnizaciones en cuotas, y un bajo incremento salarial atado a pautas de productividad. Las consecuencias de este desenlace perduraron durante años ya que produjo una fuerte desmoralización en los operarios que quedaron en la fábrica. Por su parte, la Lista Bordó eclosionó: algunos miembros renunciaron a sus cargos en la empresa

[21] *Crónica* (1° edición), ediciones del 15-1-1992 y 16-1-1991; *Prensa Obrera*, N° 350, 29-1-1992. El debilitamiento del colectivo en lucha puede observarse en la octava asamblea. Si bien fue la más numerosa de todas (asistieron 500 trabajadores), unos cien operarios decidieron retirarse antes de la votación debido a las continuas discusiones producidas entre un sector que apoyaba la postura del SUTNA (que incluía a la organización de base) y otro que exigía la reincorporación de la totalidad de los despedidos. *Solidaridad Socialista*, N° 411, 26-2-1992.

y en la seccional, otros la abandonaron para pasarse a la Lista Violeta (dirigida por Pedro Wasiejko), mientras que uno de los delegados que no aceptó negociar con la patronal ni irse de la fábrica fue, posteriormente desaforado y echado sin indemnización (Varela, 2015).

Otro caso de pérdida de empleo, aunque de forma generalizada, ocurrió en la cooperativa Hogar Obrero (ligada al viejo Partido Socialista), a la cual podemos encontrar en los cuadros sobre conflictos con mayor cantidad de trabajadores (14 mil en todo el país) y sobre mayor extensión (2 meses, entre septiembre y octubre de 1991). Allí se combinaron los efectos de las reformas económicas, el mal manejo del Consejo de Administración de la entidad y la negativa del Ministerio de Economía para realizar un salvataje de la cooperativa que se encontraba bajo concurso de acreedores. Por lo tanto, se encontraban en peligro de ser incautado los depósitos de los pequeños ahorristas de la institución y el personal de perder su fuente laboral. Ante esta situación, los trabajadores decidieron, en un principio, efectuar cortes de calle y la ocupación de varias sucursales, lo cual fue motorizado por los delegados que respondían a la conducción del Sindicato de Comercio. Esta última apostó, principalmente, a conseguir un crédito bancario que alejase las posibilidades de quiebra de la entidad, lo cual dilató el pleito.[22] Ante esta situación, en algunas sucursales (Autopista Ricchieri, Ramos Mejía, Paternal, Monte Grande, Morón, Remedios de Escalada, Plaza de Mayo) y en la Casa Central (Caballito), los empleados se organizaron por fuera de las estructuras gremiales del sindicato.[23] En octubre, mediante un acuerdo entre el titular del sindicato, Cavallieri, y el intendente porteño, Carlos Grosso, se consiguieron créditos bancarios (del Ciudad, Provincia, Credicoop y Roca) que posibilitaron la paga de una parte de los salarios adeudados.[24]

La organización de las bases por fuera de los carriles formales también puede observarse en el gremio de la Salud Pública. Desde los años previos, la Comisión Interhospitalaria, que agrupaba a médicos más de 40 hospitales del conurbano bonaerense y del resto de la provincia, venía luchando por aumentos de salario y mejoras en las partidas presupuestarias sin el apoyo de la Federación Médica de Buenos Aires. La diferencia en la contienda desarrollada a comienzos de 1991 estribó en que a los médicos se les sumó personal no profesional (en varios hospitales como el Castex de San Martín o el Materno Infantil de Avellaneda realizaron asambleas conjuntas y eligieron nuevos delegados). Para ello, enfermeras y otros trabajadores saltearon a sus conducciones gremiales, por lo general, de UPCN y ATE. Esta última, no obstante, dio apoyo al reclamo de los trabajadores en momentos determinados (como el llamado al corte de rutas y la

[22] *Crónica* (1° edición), ediciones del 8-9-1991, 13-9-1991; *Prensa Obrera*, N° 340, 19-9-1991.
[23] *Prensa Obrera*, N° 341, 2-10-1991; *Solidaridad Socialista*, N° 399, 17-10-1991.
[24] *La Nación*, 16-10-1991. Esto pondría fin a las medidas de fuerza, aunque en los siguientes años fueron vendidas o cerradas la mayoría de las sucursales, y en 1995 sería declarada la quiebra de la entidad.

retención de tareas efectuadas el 30 de enero). La Comisión impulsó paros y cortes de calle (en localidades como Lanús, La Matanza y San Martín se instrumentaron ollas populares) en reclamos por atraso salarial, el rechazo a la privatización de la Salud Pública, el bajo presupuesto y el intento de despido de una parte del personal. Por momentos se unió a las seccionales ferroviarias y los trabajadores estatales de La Plata que también se encontraban en conflicto. De esta forma, tras más de dos meses, lograron frenar momentáneamente la embestida del gobierno provincial.[25]

Así como los ferroviarios y el personal de los nosocomios llevaron adelante acciones de resistencia, en otras áreas del Estado la actividad fue menor en este período. Los empleados administrativos del AMBA, nucleados en diferentes asociaciones a nivel nacional, provincial y municipal, aparecen en nuestro relevamiento con 5 conflictos. Ahora bien, este representaba un número muy bajo en comparación con el protagonismo que habían tenido en los años anteriores. Influyó en ello la situación particular del gremio. Por un lado, cabe la posibilidad de que existiese un desgaste en los empleados públicos tras años de lucha salariales que no podían compensar la caída de ingresos producida por la inflación y el ajuste realizado tanto por el gobierno de Alfonsín como por el de Menem. Por otro lado, debemos ponderar la posición de la dirigencia de UPCN, el sindicato de mayor cantidad de afiliados, contraria a ir al choque con el gobierno por su vinculación con este a partir del crecimiento en su integración al Estado (Etchemendy, 2001).[26] Ahora bien, los empleados nucleados ATE, la otra asociación de importancia, tampoco organizaron un número importante de enfrentamientos. Cabe interrogarnos sobre esta inacción dada la perspectiva que señala el rol activo que tuvo esta entidad contra el gobierno y las reformas neoliberales en esta etapa (Armelino, 2015; Drolas *et al.*, 2010; Duhalde, 2009).

En resumen, las acciones analizadas en su mayoría eran una respuesta defensiva frente a los cambios económicos de este período. En términos cuantitativos hubo una mayor cantidad de medidas de fuerza en el sector privado, lo cual se refleja al momento de analizar los pleitos de mayor duración como en el caso de la metalúrgica La Cantábrica y el Banco Alas. No obstante, en diferentes áreas del Estado asistimos a importantes choques que se pueden observar cuando analizamos conflictos por cantidad de trabajadores en un sitio laboral. Sobre esto último, vale rescatar el accionar de los maquinistas ferroviarios y los bancarios (en su mayoría de entidades públicas), los cuales presentaron una mayor resistencia que otros colectivos del Estado al ataque gubernamental. Principalmente el caso de los fraternales, el diferente desenlace en las dos huelgas, resulta un de los ejemplos paradigmáticos de un cambio de época favorable a la clase dominante.

[25] *Crónica* (6° edición) ediciones del 29-1-1991 y 31-1-1991; *Crónica* (1° edición), 1-2-1991; *Solidaridad Socialista*, N° 373, 3-4-1991.
[26] *Crónica* (1° edición), 29-8-1991.

3. El retroceso del vandorismo

La menor cantidad de medidas de fuerza también se explica por los cambios estructurales y tácticos de gran parte de la dirigencia gremial. En términos cuantitativos, se observa una consolidación de la posición "neoparticipacionista" y un retroceso de la táctica "vandorista". Al igual que en los años previos, ninguna de las centrales sindicales llevó a cabo huelgas generales. La CGT Azopardo, que tenía un discurso de mayor oposición a las reformas neoliberales, solo impulsó dos movilizaciones: una en noviembre de 1990 que estuvo debilitada por la deserción de la UOM y otras asociaciones a último momento. Por esta razón, únicamente logró concentrar a 30 mil personas en Plaza de Mayo.[27] La segunda fue llevada a cabo en junio de 1991. De menor convocatoria que la anterior (2500 personas en el Congreso), fue impulsada por las delegaciones regionales de la central, junto con ATE y CTERA, en rechazo del proyecto del gobierno de parcelar el pago del aguinaldo.[28] Esta fue la última medida promovida por esta confederación, la cual en los meses siguientes seguiría sufriendo el alejamiento de diferentes asociaciones en disconformidad con el liderazgo de Ubaldini.

A la hora de analizar la cantidad de contiendas por gremio lideradas por las cúpulas sindicales, se destaca el accionar del gremio docente (**Anexo: Cuadro VII**). Atendiendo las particularidades de este sector, los 24 enfrentamientos pueden comprenderse, en parte, debido a la combinación de la mala situación laboral, el bajo presupuesto educativo y la fragmentación sindical existente. El gremio era uno de los más afectados por la devaluación salarial y las reformas del gobierno. Además, a diferencia de otros colectivos, el accionar directo no se encontraba desincentivado por las posibilidades de despido ni tampoco existió en este gremio un plan de retiro voluntario.

En segundo término, debemos tener en cuenta los alineamientos políticos de la dirigencias docentes. La conducción nacional de UDA (que agrupaba 60 mil docentes en todo el país) no llevó adelante medidas en este período (con la excepción de la seccional de Capital Federal), en gran parte, debido a su alianza con el menemismo. Con respecto a la Lista Celeste que conducía CTERA, SUTEBA y UMP, la vinculación entre cercanía con el gobierno y dinámica conflictual resulta más compleja: estaba enfrentada a la administración nacional, pero mantenía un vínculo más estrecho con la intendencia porteña y con la gobernación bonaerense durante la gestión de Cafiero.[29] Al mismo tiempo, este

[27] *Clarín*, 16-11-1990.
[28] *Crónica* (1° edición), 6-6-1991.
[29] No obstante la cercanía con Grosso, en Capital Federal, la UMP llevó adelante dos disputas en este período: un paro parcial por mejoras salariales y huelgas de 24 y 48 horas, y un ayuno de 24 horas (de dirigentes y

nucleamiento pugnaba por mantener lazos de negociación con la administración menemista, principalmente, con respecto a la ley de paritaria docente que sería promulgada en abril de 1991.[30] En esta norma se incluía en su artículo 14 que las asociaciones participantes de la negociación podían establecer el cobro de cuotas solidarias a afiliados y no afiliados. A cambio, el artículo 15 fijaba que el Ministerio de Trabajo podía declarar la conciliación obligatoria ante conflictos derivados por desacuerdos en materia de salario. De esta forma, la conducción de CTERA procuraba conseguir un ingreso en caso de aumento de haberes (cuestión que no se lograría como consecuencia de la ley de Convertibilidad), pero al mismo tiempo aceptaba que el gobierno profundizara la regimentación de las huelgas. De hecho, en esta coyuntura la secretaria general de la confederación, Mary Sánchez, declaró que la lucha por el salario no era el objetivo principal.[31] Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo Nacional endureció su posición de mantener congelado los haberes durante 1991 (a pesar de que desde el último aumento efectuado en marzo se había producido una devaluación del 27%), las medidas de CTERA tuvieron el acatamiento más alto de todo este período.[32] Igualmente, siguiendo la tónica inaugurada luego del Maestrazo de 1988, la dirigencia no se planteó establecer un plan de lucha de larga duración.

En la provincia de Buenos Aires, las diferencias políticas entre las asociaciones también afectaba la dinámica conflictual. La FEB era opositora de Cafiero, mientras que SUTEBA mantuvo estrechos vínculos con este, cuestión que se modificaría con la asunción de Duhalde a fines de 1991. Estas dos entidades, por momentos, lograron coincidir sus medidas pero ello no fue la pauta.

Esta falta de acuerdos entre las asociaciones a nivel nacional, provincial y municipal explica en parte la gran cantidad de acciones llevadas a cabo por el gremio ya que, por lo general, los sindicatos las efectuaban por separado. Por su carácter atomizado solían ser de corta duración. No obstante, hubo tres excepciones protagonizadas por CONADU, SUTEBA y FEB, respectivamente, tal como se puede apreciar en nuestro relevamiento sobre la extensión de los pleitos organizados por las cúpulas gremiales (**Anexo: Cuadro VIII**). No obstante, en ninguno de esos casos se pudo lograr el objetivo de recuperar el poder adquisitivo. De esta forma, las diferencias políticas y de vínculos con el Estado limitaban aún más las posibilidades de realizar medidas contundentes y de lograr el objetivo de mejorar las condiciones de vida en un gremio de carácter heterogéneo.

---

delegados de la asociación), en rechazo al traslado de escuelas nacionales a la órbita municipal. *Crónica* (1° edición), ediciones del 30-8-1991, 9-10-1991, 21-10-1991, 22-10-1991 y 23-10-1991.

[30] *La Nación*, 30-4-1991.

[31] *Solidaridad Socialista*, N° 370, 13-3-1991.

[32] *Crónica* (1° edición), 8-8-1991; *Solidaridad Socialista*, N° 391, 10-8-1991.

Por último, con respecto a las asociaciones docentes vale señalar que en diciembre de 1991 se aprobó la ley de transferencia de las escuelas nacionales a las diferentes jurisdicciones que tuvo como consecuencia la profundización del deterioro y la desigualdad del financiamiento educativo. Si bien CTERA realizó acciones en contra esta normativa, una vez aprobada en el Congreso dejó de lado el enfrentamiento.[33] Resulta sintomático que, con excepción del sindicato universitario, no hubo medidas de fuerza en el inicio lectivo de 1992 por parte de la confederación docente, algo que no ocurría desde 1989.[34] En este contexto, la Lista Celeste prefería apostar por el ayuno de dirigentes y delegados, dejando de lado la paralización de las clases. No existía predisposición de las cúpulas para presionar a los gobiernos en el momento del año en que más posibilidades estratégicas tenían para lograr mejoras. Ahora bien, no tenemos registros de que esta posición hubiese generado tensiones o críticas en las bases. Probablemente, la cantidad de medidas de fuerza fragmentadas llevadas adelante durante la década anterior y la falta de resultados colaboraron con esta falta de interés por salir de las aulas.

En nuestro relevamiento sobre las cúpulas, los sindicatos de los empleados del Poder Judicial a nivel nacional (UEJN) y provincial (AJB) también tuvieron un lugar destacado, sobre todo en cuanto a la duración de sus disputas. Como ocurriera en los años previos, los conflictos estuvieron signados por la presión de los empleados por recuperar el régimen de porcentualidad que ligaba sus salarios al de los magistrados. En el caso de los judiciales a nivel nacional el descontento partía de la extensión de la Ley de Emergencia Económica Nacional que suspendía esta conquista. Y con respecto a los empleados de los juzgados bonaerenses, la movilización se dio en contra de la derogación de dicha normativa a nivel provincial por el gobernador Cafiero en 1990. Como vimos en otros períodos, esta lucha no era solo salarial sino que formaba parte de la identidad particular de los judiciales. Sin embargo, en ninguno de los casos, lograron revertir esta situación. Los empleados de la Justicia Nacional, incluso, a pesar del amplio acatamiento que tenían las medidas y del apoyo que recibieron de algunos jueces,[35] debieron soportar descuentos salariales de importancia impuestos por la Corte Suprema.[36]

Siguiendo con el análisis de las contiendas laborales según los gremios, a continuación de los judiciales aparecen los aeronáuticos (5), quienes debieron lidiar con los efectos de la privatización de Aerolíneas y la concesión de áreas del Aeropuerto de Ezeiza y

[33] *La Nación*, ediciones del 2-11-1991, 14-11-1991 y 7-12-1991.
[34] De hecho, la última huelga convocada por CTERA a fines del ciclo lectivo de 1991, en contra de la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias y en reclamo de la convocatoria a paritarias, tuvo escasa adhesión en Buenos Aires y Capital Federal. *Crónica* (1° edición), 28-11-1991.
[35] Incluso, una jueza de Roca (Río Negro) y un secretario de la Corte Suprema dieron a sus empleados la fracción del salario cobrado por encima de la porcentualidad que los judiciales reclamaban. *Crónica* (1° edición), 19-11-1991.
[36] *Crónica* (1° edición), 5-12-1991.

del Aeroparque Jorge Newbery. Varias de las medidas tuvieron como objetivo visibilizar diversas problemáticas sin afectar los vuelos. Esto mostraba las limitaciones para presionar a la patronal y el Estado en esta coyuntura. Incluso, APA, el sindicato que más acciones llevó delante de todo el gremio, terminó por pactar un acuerdo salarial por productividad en octubre de 1991.[37] Su titular, Francisco Villani, pertenecía a la CGT Azopardo, entidad que había rechazado duramente el decreto del gobierno que ataba las subas de los ingresos al aumento de la explotación de la fuerza de trabajo.

Aunque experimentó un retroceso con respecto a la cantidad de disputas, la dirigencia de los obreros metalúrgicos encabezó la lista de los pleitos de mayor duración. Entre finales de 1991 y gran parte de 1992, la UOM llevó adelante un plan de lucha con idas y vueltas. La conducción nacional expresaba su oposición a firmar acuerdos salariales atados a pautas de productividad, tal como había impuesto el gobierno de Menem en 1991. La falta de entendimiento llevó al miguelismo a utilizar la táctica de "golpear para negociar". Sin embargo, esta postura carecía de peso en este contexto dada la negativa de las patronales a realizar negociaciones con la cúpula a nivel nacional. En línea con lo señalado por Battistini (2000), en esta disputa se observa la división entre el discurso y el funcionamiento de la UOM. La falta de acuerdo a nivel nacional que provocaba paros parciales o totales interrumpidos por la sanción de arbitraje obligatorio, ocurría en paralelo a una dinámica de negociaciones (iniciada desde tiempos de la última dictadura) que llevaban a cabo seccionales o CI con empresas en particular. De hecho, la automotriz SEVEL (Fiat-Peugeot) logró que fuese homologado un acuerdo salarial basado en el decreto 1334/91 (aumento de haberes por productividad) contradiciendo la postura de Lorenzo Miguel.[38] De esta forma, mientras parecía que la dirigencia mantenía una posición tendiente a la defensa del convenio laboral de 1975 y el criterio de ultractividad, en el interior del gremio operaba una transformación de las condiciones de explotación en los sitios laborales.

4. A modo de cierre

A lo largo de estas páginas realizamos un relevamiento de la conflictividad laboral en el AMBA entre septiembre de 1991 y abril de 1992. A pesar de encontrar focos de resistencia de importancia en distintos lugares de trabajo, al comparar el desarrollo de las disputas con la de los años previos podemos sacar como principal conclusión que existió una menor capacidad y disposición para llevar adelante medidas de fuerza. Sin embargo, las causas objetivas de este declive (el surgimiento de una hegemonía neoconservadora y un nuevo modo de acumulación) deben encadenarse con razones subjetivas.

[37] *La Nación*, 11-10-1991.
[38] *Crónica* (1° edición), 30-6-1992.

En relación con ello, consideramos que debemos profundizar la pesquisa sobre el accionar del gobierno, las dirigencias sindicales y de aquellos colectivos que, a pesar de una relación de fuerzas adversa, decidieron enfrentar esta ofensiva en su contra. Para cumplir esta meta, debemos combinar el análisis cuantitativo con elementos otra índole y, así, conocer otras aristas de un momento signado por modificaciones de los consensos sociales en torno a las luchas del movimiento obrero.

Una cuestión a problematizar reside en el vínculo entre las agrupaciones políticas opositoras a las dirigencias gremiales y los organismos de base. En particular, nuestro interés reside en las izquierdas, dado que conocemos más sobre los nucleamientos peronistas que dirigían la mayoría de los sindicatos que acerca de estas corrientes que ocupaban un espacio minoritario en el movimiento obrero. Influenciadas por el devenir de la coyuntura internacional, algunas de estas organizaciones como el Partido Comunista (PC) y el Movimiento al Socialismo (MAS) atravesaban una crisis interna que influyó en la dinámica conflictual en aquellos sitios laborales donde contaban con inserción. Resulta necesario indagar sobre las formas en el que el desarrollo y desenlace de varias de estas disputas potenció sus problemas internos.

Otra arista a explorar radica en la relación entre género y clase en este marco de luchas sindicales. Por ejemplo, sabemos que durante la huelga ferroviaria de 1991 y durante la disputa en FATE se formaron Comisiones de Mujeres, pero poco conocemos sobre su funcionamiento y acerca de si existieron tensiones entre ellas y los colectivos compuestos por una fuerza de trabajo mayoritariamente masculinizada.

En vinculación con esta problemática surge el interrogante de cómo el retroceso de las condiciones de lucha resintió el nexo entre los ámbitos laborales y el área de reproducción social. Retomando el conflicto ferroviario sabemos que durante la primera contienda hubo una gran solidaridad por parte de vecinos y usuarios que, sin embargo, se rompió en gran parte durante la huelga de 1992. Pensamos que, en este sentido, debemos seguir prestando atención a los cambios en los consensos sociales a partir de la sanción de la Ley de Convertibilidad, la cual permitió la consolidación de la hegemonía menemista.

En suma, el análisis cuantitativo trazado abre nuevos caminos para la investigación sobre el rol del movimiento obrero en los inicios de la década de 1990 en Argentina. En esa tarea nos embarcamos.

Bibliografía

Armelino, Martín (2015). “Reformas de mercado y reacciones sindicales en Argentina. Una revisión desde la experiencia de los trabajadores públicos”. *Desarrollo Económico*, Vol. 55, N° 216, pp. 245-278.

Battistini, Osvaldo (2000). “La negociación colectiva y la estructura sindical en Argentina (1988-1998)”. Tesis de posgrado presentada en la Maestría Ciencias Sociales del Trabajo, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Buenos Aires.

Bonnet, Alberto (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires, Prometeo Libros.

Correa, Mauricio (2006). “El fracaso de la concepción sindical vandorista de la UOM San Nicolás en el conflicto por la privatización de SOMISA”. *Historia Regional*, sección Historia, ISP N° 3, N° 24, pp. 66-86.

Dawyd, Darío y Silvia Nassif (2013). “Fuentes para el estudio del movimiento obrero: El Servicio de Documentación e Información Laboral (DIL), dirigido por Leonardo Dimase (1960-1989)”. *Corpus [en línea]. Archivos virtuales de la alteridad americana*, Vol. 3, Nº 2, pp. 1-9.

Donaire, Ricardo y Verónica Lascano (2002). “Movimiento obrero e hiperinflación”. *Programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina (PIMSA)*, Documentos de trabajo Nº 36, pp. 77-112.

Drolas, Ana, Santiago Duhalde y Patricia Ventricci (2010). “Reforma del Estado, privatizaciones y resistencia sindical en Argentina”. Figari, Claudia, Paula Lenguita y Juan Montes Cató (comps.). *El movimiento obrero en disputa. La organización colectiva de trabajadores, su lucha y resistencia en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires, Ediciones Ciccus, pp. 163-177.

Duhalde, Santiago (2009). La respuesta de los sindicatos estatales al neoliberalismo en Argentina (1989-1995). *Trabajo y Sociedad*, Vol. XII, N° 13, pp. 1-13.

Etchemendy, Sebastián (2001). “Construir coaliciones reformistas: la política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica”. *Desarrollo Económico*, Vol. 40, N° 160, pp. 675-706.

Filippa, Valeria (2012). “Neoliberalismo y flexibilización laboral. El conflicto del ’91 en la planta de Acindar de Villa Constitución. Sus efectos en la subjetividad de los trabajadores de base”. *Historia Regional*, Sección Historia, ISP Nº 3, Nº 30, pp. 217-236.

Ghigliani, Pablo (2009). “Acerca de los estudios cuantitativos sobre conflictos laborales en Argentina (1973-2009): reflexiones sobre sus premisas teórico-metodológicas”. *Conflicto Social*, N° 2, pp. 76-97.

Gilly, Adolfo (1986). “La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores)”. *Cuadernos del Sur*, Nº 4, pp. 5-39.

Giniger, Nuria (2014). “El poder de la planta de Acindar. Un estudio de caso en Villa Constitución, Argentina”. *Nueva Antropología*, Vol. XXVII, N° 81, pp. 181-199.

Gómez, Marcelo, Norberto Zeller y Luis Palacios (1996). “Conflictividad laboral durante el Plan de Convertibilidad (1991-1995). Las prácticas de lucha sindical en una etapa de reestructuración económica y desregulación del mercado de trabajo”. *Cuadernos del Sur*, Nº 22-23, pp. 119-160.

Jabbaz, Marcela (1996). *Modernización social o flexibilización salarial*. Buenos Aires, CEAL.

Lucita, Eduardo (1999). “El movimiento huelguístico ferroviario de 1990-1992. El fin del ciclo histórico”. Lucita, Eduardo (comp.). *La patria en el riel: un siglo de lucha de los trabajadores ferroviario*s. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, pp. 9-92.

Massano, Juan (2022). “El conflicto sindical en la posdictadura argentina: aportes para un análisis cuantitativo”. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, Nº 20, pp. 103-134.

McGuire, James (1996). "Strikes in Argentina: Data Sources and Recent Trends". *Latin American Research Review*, Vol. 31, Nº 3, pp. 127-150.

Nueva Mayoría (2013). *Indicadores de conflictividad social (1980-2012)*. Buenos Aires.

Piva, Adrián (2012). *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*. Buenos Aires, Biblos.

Pozzi, Pablo y Alejandro Schneider (1994). *"Combatiendo al capital". Crisis y recomposición de la clase obrera argentina (1983-1993)*. Buenos Aires, El Bloque.

Sechi, Leonardo (2009). "Esta vez no habrá traición, esta vez dirigen las bases". Cena, Juan Carlos. *Ferroviarios, sinfonía de acero y lucha.* Buenos Aires, Edición Monarefa y La Nave de los Locos, pp. 371-391.

Soul, Julia (2014). *Somiseros. La configuración y el devenir de un grupo obrero desde una perspectiva antropológica*. Rosario, Prohistoria.

Spaltenberg, Ricardo (1996). "Conflictos laborales en Argentina: 1984-1994". Instituto de Investigaciones Gino Germani, mimeo.

Varela, Paula (2015). *La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte del conurbano bonaerense 2003-2014*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Villanueva, Ernesto (coord.) (1994). *Conflicto Obrero. Transición política, conflictividad obrera y comportamiento sindical en la Argentina 1984-1989*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Anexo

Período	Conflictos en lugares de trabajo impulsados por organizaciones de base ya existentes o conformadas durante los mismos	Conflictos en lugares de trabajo sin organización de base o al margen de ella	Conflictos en lugares de trabajo sin datos sobre existencia de organización en el lugar de trabajo	Conflictos impulsados por la dirigencia (o agrupación sindical) a nivel nacional, regional, de seccional o en una empresa en particular	Total
15-9-1990 1990 a 30-4-1992	82 (Promedio por mes: 4,3)	4 (0,2)	14 (0,7)	100 (5,3)	200 (10,5)

Cuadro I. Conflicto con medidas de fuerza (paros, ocupaciones de lugares de trabajo, huelga de hambre, movilización, quite de colaboración, trabajo a reglamento, olla popular) en AMBA. Período: 15-9-1990 a 30-4-1992.

Período	Conflictos en actividades de servicios	Conflictos en actividades industriales	Total
15-9-1990 1990 a 30-4-1992	64 (3,4)	36 (1,9)	100 (5,3)

Cuadro II. Conflictos impulsados desde los lugares de trabajo en AMBA diferenciados por la propiedad de los medios de producción. Período: 15-9-1990 a 30-4-1992.

Período	Conflictos en empresas de capital privado	Conflictos en empresas y sectores administrativos estatales	Conflictos en empresas de capital mixto	Conflictos en entidades civiles sin fines de lucro	Total
15-9-1990 1990 a 30-4-1992	53 (Promedio por mes: 2,8)	46 (2,4)	-	1 (0,1)	100 (5,3)

Cuadro III. Conflictos impulsados desde los lugares de trabajo en AMBA diferenciados por la propiedad de los medios de producción. Período: 15-9-1990 a 30-4-1992.

Gremio	Conflictos en lugares de trabajo impulsados por organizaciones de base (con o sin apoyo de la dirigencia) o conformadas durante los mismos	Conflictos en lugares de trabajo sin organización de base o al margen de ella	Conflictos en lugares de trabajo sin datos sobre existencia de organización en el lugar de trabajo	Total
Ferroviario	20		1	21
Bancario	15			15
Metalúrgicos	5		2	7
Administrativos estatales	5			5
Salud Pública	3		2	5
Neumático	4			4

Cuadro IV. Gremios con mayor cantidad de conflictos impulsados desde los lugares de trabajo en AMBA. Período: 15-9-1990 1990 a 30-4-1992.

Sitio laboral	Gremio	Zona	Medidas de fuerza	Reclamo	Organización interna	Cantidad de trabajadores (aprox.)	Mes y año
Banco Nación	Bancario	Todo el país	Paros parciales, paro de 24 horas, movilizaciones	Aumento salarial, rechazo al proyecto de reestructuración de la banca oficial (despidos), a la extensión del horario laboral y al retiro voluntario.	Sí	18000 en todo el país (3700 en la casa central de Capital Federal)	3-1991 / 8-1991 / 9 a 11-1991
Banco Provincia	Bancario	Buenos Aires y Capital Federal	Paros parciales, paro de 24 horas, olla popular	Atraso y aumento salarial	Sí	16000 (3000 en la sede central de Capital Federal)	12-1990 / 4-1992
Seccionales "rebeldes"	Ferroviario (principalmente de La Fraterimidad)	Principalmente en Capital Federal, Gran Buenos Aires	Paro por 24 horas, paro por 48 horas y paro por tiempo indeterminado, movilizaciones, huelga de hambre, boicots	Aumento salarial y en oposición a despido de huelguistas	Sí	Entre 8000 y 20000	2-1991 a 3-1991
Hogar Obrero	Empleados de comercio	Todo el país	Movilización, ocupación de casa central y diversas sucursales	Defensa de puestos laborales ante posibilidad de cierre	Sí (organizado por fuera de la CI)	14000 en todo el país (casa central, 22 sucursales y 300 supermercados)	8-1991 a 10-1991
Comisión Interhospitalaria (Hospitales provinciales, municipales y clínicas privadas)	Salud pública	Gran Buenos Aires y La Plata	Paro por tiempo indeterminado, corte de calles, movilizaciones	Atraso y aumento salarial, aumento del presupuesto en el área de Salud pública, defensa de puestos de trabajo, oposición a	Sí	Entre 8000 y 10000	1-1991 a 4-1991

				la privatización de áreas de Salud Pública.			
Terrabusi	Alimentación	Dos plantes de General Pachecho y Capital Federal	Corte de ruta, quite de colaboración, movilización	Aumento salarial	Sí	5000	11-1990
Caja de Ahorro y Seguro	Bancario	Todo el país (casa central en Capital Federal)	Ocupación de sede central y 28 sucursales	Oposición a la privatización de la entidad	Sí	4700	2-1991

Cuadro V. Conflictos más relevantes impulsados en sitios laborales teniendo en cuenta cantidad de trabajadores involucrados. Período: 15-9-1990 1990 a 30-4-1992.

Sitio laboral	Gremio	Zona	Cantidad de trabajadores (aprox.)	Medidas de fuerza	Organización interna	Reclamo	Duración del conflicto (aprox.)
La Cantábrica	Metalúrgico	Morón (zona oeste del GBA)	720	Ocupación, movilizaciones	Sí	Oposición al cierre, defensa de los puestos laborales	8 meses (abril – diciembre de 1991)
Banco Alas	Bancario	Todo el país (casa matriz en Capital Federal)	1200 en todo el país	Ocupación de casa matriz y 72 sucursales, movilizaciones	Sí	Oposición al cierre de la entidad, defensa de los puestos laborales, reubicación del personal cesanteado en otros bancos	4 meses (enero - mayo de 1991)
Motormech	Metalúrgico	La Matanza (zona oeste del GBA)	100	Movilizaciones, ocupación de fábrica, olla popular	Sí	Despido de 50 trabajadores	3 meses (marzo - junio de 1991)
Comisión Interhospitalaria (Hospitales provinciales, municipales y clínicas privadas)	Salud pública	Gran Buenos Aires y La Plata	8000	Paro por tiempo indeterminado, corte de calles, movilizaciones	Sí	Atraso y aumento salarial, aumento del presupuesto en el área de Salud pública, defensa de puestos de trabajo.	3 meses (enero - abril de 1991)
FATE	Neumático	San Fernando (zona norte del GBA)	1100	Paros parciales, bloque de entrada de la empresa, olla popular	Sí	Aumento salarial, reincorporación de huelguistas despedidos	75 días (noviembre de 1991 - enero de 1992)
Yaguané	Cárnico	La Matanza (zona oeste del GBA)	900	Movilizaciones	Sí	Rechazo a suspensiones y lock out patronal	2 meses (enero – marzo de 1991)
Hogar Obrero	Empleados de comercio	Todo el país (casa central en Capital Federal)	14000 en todo el país (casa central, 22 sucursales y 300 supermercados)	Movilización, ocupación de casa central y diversas sucursales	Sí (organizado por fuera de la CI)	Defensa de puestos laborales ante posibilidad de cierre	2 meses (agosto a octubre de 1991)

Banco Nación	Bancario	Todo el país	18000 (en todo el país)	Paros parciales, paro de 24 horas, movilizaciones	Sí	Aumento salarial, rechazo al proyecto de reestructuración de la banca oficial (despidos), a la extensión del horario laboral y al retiro voluntario	50 días (septiembre a noviembre de 1991)

Cuadro VI. Conflictos más relevantes impulsados en los lugares de trabajo del AMBA según la duración de los mismos. Período: 15-9-1990 1990 a 30-4-1992.

Gremio	**Conflictos impulsados por la dirigencia (o agrupación sindical) a nivel nacional, regional, de seccional o en empresas en particular**
Docente	24
Judicial	6
Aeronáutico	5

Cuadro VII. Gremios con mayor cantidad de conflictos llevados adelante por dirigencias sindicales a nivel nacional y/o de la zona de AMBA. Período: 15-9-1990 1990 a 30-4-1992.

Sindicato	**Reclamo**	**Medidas**	**Duración del conflicto (aprox.)**
UOM (metalúrgico)	Aumento salarial, oposición a acuerdos por productividad	Paros parciales, paro de 24 horas, trabajo a reglamento	11 meses (diciembre de 1991 a noviembre de 1992)
SUTEBA (docente)	Atraso y aumento salarial	Paro de 24 horas, paro de 48 horas, paro de 120 horas, huelgas zonales, movilizaciones	3 meses (abril a julio de 1991)
FEB (docente)	Aumento salarial	Paros de 24 horas	3 meses (agosto a noviembre de 1991)
CONADU (docente)	Aumento y atraso salarial	Paro de 24 horas, paro de 96 horas, movilizaciones	3 meses (agosto a noviembre de 1991)

FJA y AJB (judicial)	Aumento salarial, contra la suspensión de la ley provincial de proporcionalidad con cargos jerárquicos del Poder Judicial	Trabajo a reglamento, paros parciales, paros de 24 horas	2 meses (octubre a diciembre de 1991)
UEJN (judicial)	Aumento salarial. Reimplantación de proporcionalidad con cargos jerárquicos del Poder Judicial ("Ley Enganche")	Paro de 24 horas, trabajo a reglamento por tiempo indeterminado	2 meses (octubre a diciembre de 1991)

Cuadro VIII. Conflictos más relevantes impulsados por la dirigencia según la duración de los mismos a nivel nacional o en la zona de AMBA. **Período: 15-9-1990 1990 a 30-4-1992.**